

Políticas económicas y sostenibilidad en el cooperativismo financiero ecuatoriano

Economic policies and sustainability in Ecuadorian financial cooperatives

^a Renato Estuardo Paredes Cruz ✉; ^b Franklin Rodrigo Pacheco Rodríguez;

^c Espinosa Jaramillo María Teresa; ^d Becerra Palacios Edgar Rolando ^e García Tamayo Galo Hernán

Resumen

Introducción: El cooperativismo financiero ecuatoriano constituye un componente estratégico de la economía popular y solidaria, al promover inclusión financiera y desarrollo territorial. Sin embargo, su regulación plantea desafíos relacionados con el equilibrio entre estabilidad institucional, sostenibilidad financiera y competitividad del sector. **Objetivo:** Analizar la evolución, el desempeño y la alineación estratégica del sector cooperativo financiero ecuatoriano frente a las políticas públicas durante el periodo 2015-2025. **Metodología:** Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, diseño longitudinal y alcance descriptivo-analítico. La muestra estuvo conformada por datos oficiales provenientes de la Superintendencia y el Banco Central del Ecuador, procesados mediante estadística descriptiva y análisis de series temporales para evaluar la evolución institucional y financiera del sector. **Resultados:** Los resultados evidenciaron un proceso de consolidación institucional caracterizado por una reducción del número de entidades en 37,4 %, mientras los activos del sector alcanzaron una participación equivalente al 24,16 % del producto interno bruto. Asimismo, se observó una concentración significativa de recursos en el primer segmento cooperativo, que acumuló el 84,32 % del total, reflejando diferencias en capacidad operativa y competitiva entre entidades. **Conclusiones:** El marco regulatorio ecuatoriano fortaleció la solvencia sistémica, la estabilidad financiera y la función anticíclica del cooperativismo. No obstante, también generó asimetrías que limitan la competitividad de las cooperativas pequeñas y medianas. Se requiere una regulación diferenciada que preserve la estabilidad sin restringir la innovación y el desarrollo equilibrado del sector.

Palabras clave: Cooperativismo financiero, Economía popular solidaria, Ecuador, Políticas económicas, Sostenibilidad

^a Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA). Ambato, Ecuador
reparedes@pucesa.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-1100-8596>

^b Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA). Ambato, Ecuador
fpacheco@pucesa.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9341-9163>

^c Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ambato, Ecuador
mtespinosa@espe.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-6006-3826>

^d Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador
edgar.becerra@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9367-8229>

^e Universidad de los Hemisferios. Quito, Ecuador
galog@uhemisferios.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-2268-2730>

Abstract

Background: Ecuador's financial cooperative sector constitutes a strategic component of the solidarity-based popular economy, promoting financial inclusion and territorial development. However, its regulatory framework poses challenges related to balancing institutional stability, financial sustainability, and sector competitiveness. **Objective:** To analyze the evolution, performance, and strategic alignment of Ecuador's financial cooperative sector in relation to public policies during the 2015–2025 period. **Methodology:** A quantitative study was conducted using a longitudinal design and a descriptive-analytical scope. The sample consisted of official data from the Superintendency and the Central Bank of Ecuador, which were analyzed using descriptive statistics and time-series analysis to assess the institutional and financial evolution of the sector. **Results:** The findings revealed a process of institutional consolidation characterized by a 37.4% reduction in the number of entities, while sector assets reached a share equivalent to 24.16% of gross domestic product. A significant concentration of resources was also observed in the first cooperative segment, which accounted for 84.32% of total assets, reflecting differences in operational capacity and competitiveness across institutions. **Conclusions:** Ecuador's regulatory framework strengthened systemic solvency, financial stability, and the countercyclical role of the cooperative sector.

Historia del artículo:
Artículo recibido 28 de mayo 2026 |
Aceptado 15 de junio 2026 |
Publicado 01 de julio 2026

Cómo citar:
Paredes Cruz, R. E., Pacheco Rodríguez, F. R., Espinosa Jaramillo, M. T., Becerra Palacios, E. R., & García Tamayo, G. H. (2026). Políticas económicas y sostenibilidad en el cooperativismo financiero ecuatoriano. *Impulso, Revista de Administración*, 6(15), 1-13.
<http://doi.org/10.59659/impulso.v.6i15.368>

However, it also generated asymmetries that constrain the competitiveness of small and medium-sized cooperatives. Differentiated regulation is therefore required to preserve stability while fostering innovation and balanced sectoral development.

Keywords: Financial cooperatives, Popular and solidarity economy, Ecuador, Economic policies, Sustainability

Introducción

A nivel internacional, las prácticas asociativas de la economía popular y solidaria se remontan al siglo XIX, cuando el cooperativismo financiero emergió como una alternativa frente a las fallas del mercado capitalista y a la concentración bancaria. Estos principios se sustentan en la cooperación, la autodeterminación democrática y la primacía del ser humano sobre el capital. Además, se ha señalado que este modelo ha demostrado capacidad para atenuar desigualdades estructurales y promover la inclusión de colectivos históricamente excluidos (Castro et al., 2022). La crisis financiera global de 2008 revalorizó el papel de las entidades cooperativas como mecanismos estabilizadores, lo que incentivó reformas orientadas a fortalecer su solvencia sin desnaturalizar su esencia asociativa.

En América Latina y el Caribe, los mercados financieros presentan profundidad limitada, brechas significativas de inclusión y elevada heterogeneidad institucional. El análisis regional destaca que las instituciones públicas de financiamiento del desarrollo y las entidades cooperativas pueden movilizar recursos hacia sectores productivos marginados por la banca comercial. La región requiere estrategias que combinen innovación digital, educación financiera y regulación prudencial proporcionada para ampliar el acceso al crédito y fomentar el crecimiento sostenible (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024). En este contexto, las cooperativas de ahorro y crédito operan como un instrumento clave para la democratización financiera, aunque enfrentan desafíos asociados a la informalidad laboral y a la fragilidad macroeconómica característica de las economías emergentes.

Desde una perspectiva regional, la economía social y solidaria se ha consolidado como un paradigma alternativo frente al modelo neoliberal hegemónico. Este enfoque postula la construcción de economías transformadoras basadas en la reciprocidad, la justicia social y la sustentabilidad ambiental. Las experiencias latinoamericanas evidencian que las políticas de fomento a este sector presentan avances desiguales, condicionados por la voluntad gubernamental y por la fortaleza institucional de cada país. Algunos Estados han promulgado leyes específicas y creados observatorios para visibilizar la contribución del sector al desarrollo (Berlien et al., 2022). No obstante, persisten tensiones entre la lógica mercantil y los principios solidarios que afectan la identidad de las organizaciones y el cumplimiento de su función social.

En el caso ecuatoriano, el Sistema Financiero Popular y Solidario busca equilibrar los objetivos sociales y económicos a través de las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y cajas comunales. Este subsistema coexiste con la banca privada y pública bajo un esquema de regulación diferenciada que reconoce su naturaleza asociativa y su función de inclusión. La segmentación institucional aplicada por la autoridad de control distribuye a las entidades según el volumen de activos, lo que permite ajustar la intensidad supervisora al perfil de riesgo de cada organización (Oña et al., 2024). Esta arquitectura busca preservar la solvencia sistémica y, simultáneamente, garantizar la cobertura financiera en territorios desatendidos por la banca tradicional.

El paradigma de las finanzas sostenibles constituye un marco conceptual relevante para comprender la contribución del cooperativismo al desarrollo. Este enfoque integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la intermediación financiera, y promueve la asignación de recursos hacia actividades productivas de impacto positivo. Las cooperativas de ahorro y crédito se ajustan naturalmente a este modelo por su orientación hacia el bienestar del socio y la reinversión de excedentes en la comunidad (Segovia et al., 2023). Por tanto, la sostenibilidad financiera de estas entidades no se restringe a la rentabilidad, sino que incorpora la equidad territorial, la inclusión social y la resiliencia frente a choques macroeconómicos.

La responsabilidad social constituye un eje diferenciador del cooperativismo financiero latinoamericano frente a la banca comercial. Esta dimensión se manifiesta en la atención prioritaria a segmentos vulnerables, en la promoción de la educación económica y en la participación democrática de los asociados. En este sentido se ha revelado que las cooperativas de la región fortalecen los lazos comunitarios y contribuyen al desarrollo local mediante la canalización de crédito hacia microempresas y unidades familiares (Carrera et al., 2024). Sin embargo, la profesionalización gerencial y la presión competitiva pueden erosionar estos principios, lo que genera un riesgo de isomorfismo con la lógica bancaria tradicional que compromete la identidad solidaria del sector.

La teoría del gobierno corporativo y de los grupos de interés aporta elementos para analizar la gobernanza cooperativa. A diferencia de la sociedad mercantil, la cooperativa opera bajo un esquema de gestión democrática en el que el asociado ejerce simultáneamente los roles de propietario, usuario y beneficiario. Esta particularidad genera una compleja red de relaciones de agencia que puede originar conflictos de interés entre los consejos de administración, los gestores profesionales y los socios (Becerra y Giraldo, 2025). La adecuada articulación de estos actores resulta determinante para la sostenibilidad institucional, ya que la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la confianza y previenen el surgimiento de prácticas desviadas.

Entre las variables que influyen en el desempeño del sector cooperativo destaca su comportamiento durante los ciclos económicos. La evidencia empírica señala que las cooperativas tienden a exhibir una mayor resiliencia frente a las recesiones que la banca comercial, debido a su orientación hacia el crédito de subsistencia y al arraigo territorial de sus asociados. Para Cancelo et al. (2022), el impacto de la pandemia en las cooperativas europeas confirma que estas entidades lograron preservar el empleo y mantener la oferta crediticia cuando otros intermediarios restringieron su actividad. Esta capacidad anticíclica se vincula con la estructura de propiedad distribuida y con la priorización de la relación de largo plazo sobre la maximización del beneficio inmediato.

La inclusión financiera constituye un objetivo central de las políticas públicas orientadas al cooperativismo. En el Ecuador, el acceso financiero alcanzó un nivel significativo en el último año, aunque subsiste una brecha entre el acceso y el uso efectivo de los servicios. Esta disparidad responde a factores estructurales como la desigualdad territorial, la dispersión poblacional y la limitada educación económica de los usuarios (Viteri et al., 2025). Las cooperativas han contribuido a reducir estas brechas mediante la apertura de oficinas en cantones rurales y el ofrecimiento de productos adaptados a las necesidades de los microempresarios. No obstante, la profundización de la inclusión exige articular estrategias digitales que mitiguen las barreras geográficas y de costo.

La educación financiera representa un factor crítico para la efectividad de las políticas de inclusión. Los hallazgos comparados entre países latinoamericanos muestran que el conocimiento financiero de la población influye en el uso responsable de los productos crediticios y en la prevención del sobreendeudamiento. Asimismo, se ha señalado que la educación económica, combinada con la oferta apropiada de servicios, amplifica el impacto del cooperativismo sobre el bienestar de los hogares (Saucedo et al., 2024). Las cooperativas ecuatorianas han incorporado programas formativos como parte de su responsabilidad social, aunque su cobertura y profundidad requieren fortalecimiento para transformar el acceso en uso productivo del crédito y consolidar la cultura del ahorro popular.

Pese a los avances descritos, subsiste un vacío de conocimiento respecto a la efectividad real de las políticas públicas ecuatorianas para conciliar la sostenibilidad financiera con la competitividad y la equidad territorial. Cabe señalar que la instrumentalización política de la economía social y solidaria puede comprometer su legitimidad y desviar los recursos públicos hacia fines electorales antes que al fortalecimiento institucional (Sánchez, 2024). Esta tensión adquiere particular relevancia en regímenes dolarizados, donde la política monetaria carece de instrumentos cambiarios y depende de la regulación prudencial.

En este marco, la pregunta central que orienta la investigación indaga ¿de qué manera las políticas económicas y la supervisión prudencial aplicadas al sector cooperativo han logrado conciliar la sostenibilidad financiera con la competitividad y la equidad territorial durante el periodo 2015-2025? El principio constitucional del Buen Vivir fundamenta esta interrogante, al establecer un modelo económico social y solidario que privilegia la primacía del trabajo sobre el capital (Aguar y De Borja, 2023). En consecuencia, el objetivo general consiste en analizar la evolución, el desempeño operativo y la alineación estratégica del sector cooperativo frente a las políticas públicas.

Método

La población de estudio comprendió la totalidad de instituciones financieras pertenecientes al sector bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La muestra fue de carácter censal y abarcó el conjunto de organizaciones reportadas en los catastros oficiales, cuya dimensión evolucionó desde 642 cooperativas reguladas en 2015 hasta 402 en mayo de 2025. La reducción responde a procesos de fusión controlada, absorciones y liquidaciones forzosas orientadas al saneamiento del sistema. Los criterios de inclusión exigieron que las entidades contaran con reportes financieros continuos durante el periodo y que operaran bajo régimen de regulación prudencial. Se excluyeron las organizaciones en liquidación definitiva y aquellas sin información auditada en el sistema de acopio integral oficial.

El estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental longitudinal y alcance descriptivo-analítico. Este diseño posibilita la observación de la evolución de variables financieras en su contexto natural, sin manipulación deliberada de los factores analizados. La perspectiva longitudinal facilita la identificación de tendencias, ciclos y quiebres estructurales en series temporales continuas. El alcance analítico permite establecer relaciones entre las políticas públicas implementadas y los indicadores de desempeño del sector. La triangulación de fuentes oficiales garantiza la robustez de los hallazgos y reduce el riesgo de sesgos provenientes de fuentes aisladas o desactualizadas.

Las técnicas de recolección se basaron en la consulta documental de fuentes estadísticas secundarias. El instrumento principal fue una matriz de consolidación de datos construida a partir de los boletines financieros mensuales y los reportes trimestrales del Sistema de Acopio Integral. Se utilizaron los documentos estadísticos de Actualidad y Cifras de la Economía Popular y Solidaria, los Informes de Rendición de Cuentas institucionales y las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. La información se complementó con datos macroeconómicos del Banco Central del Ecuador y con informes de coyuntura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se definieron tres ejes conceptuales e indicadores estandarizados para el tratamiento analítico de la información.

Consideraciones éticas

El estudio se sustentó exclusivamente en fuentes estadísticas de acceso público y datos agregados publicados por organismos oficiales, por lo que no requirió la recolección de información personal identificable ni la aplicación de instrumentos a sujetos humanos. Se respetaron los principios de transparencia, veracidad y atribución adecuada de las fuentes consultadas. La investigación se ajustó a las normas éticas de la práctica académica en ciencias económicas, y evitó la manipulación tendenciosa de los datos y la divulgación de información que pudiera comprometer la estabilidad institucional. No se requirió aprobación de comité de ética, dado el carácter documental y censal del análisis. Se declararon todas las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés, los cuales no existen.

Procedimiento de recolección de la información

El procedimiento de recolección se desarrolló en cuatro fases consecutivas. La primera fase consistió en la identificación y descarga de los boletines estadísticos, resoluciones e informes institucionales

correspondientes al periodo 2015-2025. La segunda fase comprendió la depuración y homogenización de las series temporales, ante los cambios metodológicos de segmentación aplicados por el organismo de control y las medidas temporales de tolerancia regulatoria. La tercera fase implicó la consolidación de la matriz de datos en una base única, con validación cruzada entre fuentes. La cuarta fase se orientó al cálculo de indicadores derivados, como tasas de crecimiento interanual, ratios de concentración y coeficientes de redistribución territorial. El proceso se extendió por un periodo de cuatro meses.

Análisis de los datos

El análisis de los datos se ejecutó mediante estadística descriptiva, cálculo de tasas de variación interanual y elaboración de series temporales. Se aplicaron técnicas de análisis longitudinal para identificar tendencias estructurales y puntos de inflexión asociados a eventos macroeconómicos. El procesamiento se realizó con apoyo del software Microsoft Excel 2019 y del lenguaje de programación R para la estimación de indicadores compuestos. Se emplearon ratios financieros estandarizados, como el índice de solvencia patrimonial, el coeficiente de morosidad y la razón de intermediación territorial. Se aplicó un nivel de significancia del 5 % en las pruebas de correlación entre variables macroeconómicas y financieras. La validación de resultados se efectuó mediante triangulación con cifras del Banco Central.

La estructura operativa del sector se analizó a través de la segmentación oficial dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esta clasificación distribuye a las entidades según el volumen de activos en cinco segmentos: el primero corresponde a activos superiores a ochenta millones de dólares; el segundo, entre veinte y ochenta millones; el tercero, entre cinco y veinte millones; el cuarto, entre uno y cinco millones; y el quinto, hasta un millón, e incluye cajas de ahorro y bancos comunales. Esta taxonomía permite al regulador aplicar requerimientos prudenciales proporcionales al tamaño y a la complejidad operativa de cada entidad, y equilibra la supervisión con la viabilidad institucional.

Resultados

El análisis revela que las políticas públicas de supervisión e inclusión aplicadas al Sector Financiero Popular y Solidario entre 2015 y 2025 impulsaron una profunda reestructuración institucional. La aplicación rigurosa de marcos prudenciales sobre solvencia, gobierno corporativo y suficiencia patrimonial derivó en una consolidación mediante fusiones y absorciones que redujo el número de cooperativas reguladas. Lejos de contraer la escala del sector, esta depuración coincidió con una expansión de la masa social y patrimonial. Los activos totales se multiplicaron de manera sostenida y alcanzaron una participación significativa del producto interno bruto nominal.

Asimismo, la emisión de certificados de aportación creció hasta abarcar a varios millones de socios únicos, lo que otorgó una cobertura efectiva sobre una proporción mayoritaria de la población adulta nacional. La solvencia patrimonial consolidada del sector superó al promedio de la banca privada, lo que confirma el efecto estabilizador de la regulación prudencial sobre la arquitectura financiera del país. La depuración institucional y la expansión patrimonial configuran un escenario de mayor robustez sistémica frente a choques macroeconómicos, sin que ello implique una pérdida significativa de cobertura social.

En términos de competitividad e intermediación interna, la estructura de mercado muestra una marcada concentración como se observa en la Tabla 1. Las instituciones pertenecientes al primer segmento administran la mayor proporción de los activos totales del sector y concentran la mayoría de los certificados de aportación. En contraste, los segmentos menores agrupan a una proporción considerable de las entidades registradas, pero gestionan una porción marginal del activo agregado.

La asignación de crédito refleja una especialización en consumo y microcrédito, segmentos que absorben la mayor parte del volumen mensual concedido y del saldo de cartera. Las operaciones

dirigidas al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas mantienen una participación acotada, condicionadas por los techos regulatorios a la tasa activa que restringen el margen de intermediación. Esta configuración refleja la aplicación de la segmentación oficial y el proceso de depuración institucional derivado de la regulación prudencial aplicada por la autoridad de control durante el periodo analizado.

Tabla 1. Distribución de entidades por segmento y concentración de activos

Segmento	Rango de activos (USD)	Características de gestión
Segmento 1	> 80 000 000	Supervisión intensiva, alta digitalización, competencia con banca privada
Segmento 2	20 000 000 a 80 000 000	Crecimiento regional y expansión de servicios
Segmento 3	5 000 000 a 20 000 000	Enfoque local y gestión de riesgos intermedia
Segmento 4	1 000 000 a 5 000 000	Regulación simplificada y enfoque comunitario
Segmento 5	< 1 000 000	Cajas de ahorro y bancos comunales con arraigo territorial

La serie temporal revela que el sector experimentó un crecimiento vigoroso en activos y depósitos, aunque el número total de entidades disminuyó por procesos de fusión controlada como se expone en la Tabla 2. Durante el primer subperiodo, los activos totales crecieron a una tasa anual compuesta elevada. En el segundo subperiodo, pese al impacto socioeconómico de la pandemia, los activos mantuvieron una trayectoria ascendente. Hacia el cierre del periodo, el sector reportó un volumen consolidado de depósitos y mantuvo las cooperativas del primer segmento la mayor liquidez al concentrar la mayoría de las captaciones totales del sistema. La cartera de crédito bruta acompañó este crecimiento, aunque con un deterioro coyuntural de la calidad de la cartera en el último tramo. La trayectoria descrita refleja la estabilidad alcanzada por el sector pese a los choques externos que afectaron a la economía ecuatoriana durante la última década. La convergencia entre la expansión de activos y la depuración institucional confirma el cumplimiento del objetivo estabilizador de la regulación prudencial aplicada durante el periodo.

Tabla 2. Evolución anual de variables financieras del sector (2015-2025)

Año	Activos totales	USD	
		Depósitos totales	Cartera de crédito bruta
2015	8 440	6 700	5 895
2018	14 011	10 908	10 548
2020	17 808	15 310	14 400
2021	21 533	18 737	15 065
2022	24 955	21 770	18 379
2023	26 668	21 363	19 949
2024	28 100	22 500	21 000
2025	29 500	23 700	22 200

En la Tabla 3, en relación con el ciclo económico, el sector exhibe un comportamiento contracíclico. Durante la contracción del producto interno bruto ecuatoriano, los activos del sector cooperativo experimentaron una expansión significativa. Esta resiliencia responde a la atención prioritaria a microempresas y hogares, cuya demanda de crédito de subsistencia se mantiene en periodos de recesión.

No obstante, la cartera de crédito muestra vulnerabilidad frente al estancamiento económico. La tasa de morosidad consolidada del sector ascendió a un nivel elevado al cierre del periodo, desencadenada por choques climáticos, la crisis de abastecimiento energético y la desaceleración del consumo. Esta dinámica evidencia la necesidad de fortalecer los esquemas de gestión de riesgo crediticio frente a perturbaciones externas. La composición de la cartera confirma el predominio del crédito de consumo y del microcrédito sobre el crédito productivo y de vivienda, lo que evidencia los sesgos de asignación derivados del esquema regulatorio de tasas de interés.

Tabla 3. Composición de la cartera de crédito por tipo de operación

Tipo de crédito	Participación en la cartera	%
		Tasa activa máxima regulatoria
Crédito de consumo	48.20	16.77
Microcrédito	39.80	22.50 – 28.23
Crédito de vivienda	8.10	Variable según condición
Crédito productivo PYME	3.90	11.88 - 12.75

Finalmente, en la Tabla 4 se muestra que el sector cumple una función redistributiva de alcance territorial. En los cantones con niveles de pobreza elevados, el sector coloca una cantidad superior de préstamos por cada dólar captado en depósitos. Una dinámica análoga se observa en cantones con ruralidad acentuada. Esta tendencia compensa las fallas de mercado de la banca privada convencional, al canalizar recursos hacia zonas de menor renta a través de una extensa red de puntos de atención. Una proporción mayoritaria de estas oficinas opera en cantones con elevada incidencia de pobreza y una fracción significativa se ubica en áreas rurales. La cobertura espacial activa alcanza a la mayoría de los cantones del país. Los indicadores de inclusión territorial sintetizan la contribución del sector a la redistribución de liquidez hacia zonas de mayor pobreza y ruralidad, así como la amplitud de la red física de atención desplegada a lo largo del territorio nacional durante el periodo analizado. Esta capacidad redistributiva constituye un rasgo diferenciador del cooperativismo frente a la banca comercial tradicional.

Tabla 4. Indicadores de inclusión territorial y cobertura del sector

Indicador de inclusión territorial	Valor consolidado (%)
Cobertura de población adulta nacional	56.70
Presencia en cantones del país	94.20
Colocación por dólar captado en cantones con pobreza	≥ 75.00
Colocación por dólar captado en cantones con ruralidad	≥ 75.00
Puntos de atención en cantones de alta pobreza	55.00
Puntos de atención en áreas rurales	36.00

En síntesis, la regulación prudencial consolidó el Sector Financiero Popular y Solidario mediante fusiones que redujeron entidades, pero expandieron activos y la cobertura de socios. Además, el sector muestra solvencia superior a la banca privada, comportamiento contracíclico y especialización en consumo y microcrédito, aunque con alta concentración en el Segmento 1 y morosidad creciente. También se destaca su función redistributiva al colocar ≥75% por dólar captado en zonas pobres/rurales, con presencia en el 94.2% de cantones y 55% de puntos en alta pobreza.

Discusión

El análisis integral de los hallazgos permite debatir críticamente la efectividad de las políticas económicas aplicadas por el Estado ecuatoriano en el sector cooperativo. En primer término, el proceso de institucionalización liderado por la autoridad de control logró corregir la histórica fragmentación y opacidad del cooperativismo ecuatoriano. La instauración de requerimientos prudenciales fortaleció la resistencia estructural del sistema ante emergencias macroeconómicas. La depuración gradual que redujo las cooperativas activas constituye un saneamiento indispensable para mitigar el riesgo de contagio y proteger los recursos de los depositantes. Para [Mendoza y Loor \(2026\)](#), la rentabilidad y sostenibilidad financiera confirman que la gestión financiera influye en la sostenibilidad institucional.

No obstante, desde la perspectiva de la competitividad de mercado, las políticas públicas han profundizado una asimetría estructural. La imposición de marcos normativos de cumplimiento estandarizado representa una carga operativa desproporcionada para las cooperativas de menor

escala. Las instituciones del primer segmento concentran la mayor parte de los activos, lo que permite a las entidades líderes competir con la banca privada en cuota de mercado e infraestructura tecnológica. Esta concentración plantea un dilema conceptual donde la escala operativa preserva la estabilidad macroprudencial, pero genera un riesgo de desnaturalización al asimilar la gestión de estas entidades con la lógica financiera tradicional. La responsabilidad social emerge como un motor clave del desempeño financiero en este contexto ([Lucin y Vásconez, 2025](#)).

En segundo lugar, la evidencia confirma el comportamiento contracíclico asumido por el crédito popular y solidario. Durante el quinquenio caracterizado por la desaceleración del gasto público y la volatilidad de los ingresos petroleros, la cartera de crédito ajustada en términos reales se expandió a una tasa promedio interanual elevada, con un ritmo superior al del producto interno bruto real. Asimismo, en la etapa pospandemia y durante los choques macroeconómicos recientes, el sector mantuvo la inyección de liquidez hacia los hogares y las unidades microproductivas. La conducta de las tasas de interés y los volúmenes de crédito refleja esta dinámica expansiva en segmentos específicos ([Padrón et al., 2024](#)).

Sin embargo, la alineación del sector con la sostenibilidad productiva de largo plazo enfrenta sesgos estructurales en la asignación del financiamiento. La estructura del saldo de la cartera refleja un predominio del crédito de consumo y del microcrédito, frente a una participación acotada del crédito para vivienda y una presencia marginal del crédito productivo empresarial. Esta distribución evidencia que el financiamiento cooperativo actúa prioritariamente como una red de sostenimiento del consumo corriente familiar y del autoempleo ante la precarización del mercado laboral informal. Diversos factores contextuales limitan la oferta de financiamiento productivo, entre ellos la incertidumbre macroeconómica y la rigidez regulatoria ([Cagua, 2025](#)).

Esta distorsión responde al esquema de fijación regulatoria de tasas de interés activas máximas establecido por la autoridad de control. En un entorno de fondeo costoso, los márgenes netos de intermediación se estrechan. Dado que la originación y seguimiento del crédito productivo demanda elevados costos operativos y de evaluación de riesgo, los techos regulados resultan insuficientes para cubrir el costo marginal de fondeo y la prima de riesgo. Por consiguiente, las entidades dirigen de manera racional su liquidez hacia el crédito de consumo y hacia el microcrédito minorista, los cuales permiten preservar la rentabilidad operacional. La gestión del primer segmento ilustra los desafíos derivados de esta dinámica regulatoria ([Costales et al., 2025](#)).

Por otra parte, la contribución del sector a la sostenibilidad social e inclusión territorial resulta altamente positiva. El indicador que demuestra la relación favorable entre captaciones y colocaciones en cantones con tasas de pobreza elevadas confirma la capacidad del modelo para frenar el flujo de ahorro periférico hacia los centros urbanos de mayor renta. La cobertura espacial del sector ratifica que la canalización de recursos de segundo piso a través de la banca pública ha sido un instrumento eficaz para reducir las brechas de acceso financiero. Las cooperativas operan como motores endógenos de desarrollo al retener valor en el territorio y fortalecer el tejido productivo local ([Alban et al., 2025](#)).

A pesar de estos logros en democratización financiera, el incremento registrado en la mora crediticia bruta impone un desafío crítico para la supervisión. Este deterioro, desencadenado por choques climáticos, la crisis de abastecimiento energético y la desaceleración del consumo, exige articular la gestión de riesgos mediante el comité de estabilidad financiera. El refinamiento de la política macroprudencial requiere la adopción de criterios de calificación de riesgo crediticio basados en capacidad de pago prospectiva, para evitar la sobreacumulación de pasivos en los hogares de menores ingresos. El análisis desde la economía social y solidaria enfatiza la necesidad de articular la sostenibilidad financiera con el impacto social y la equidad territorial ([Méndez y Haro, 2026](#)).

Desde una perspectiva prudencial, la gestión de la liquidez constituye un desafío creciente para las cooperativas del primer segmento. La volatilidad económica y los riesgos asociados limitan la capacidad para conceder créditos en escenarios adversos. El incremento en la morosidad compromete

la rentabilidad y agrava los problemas de liquidez. Esta dinámica exige fortalecer los mecanismos de monitoreo diario y la constitución de provisiones adecuadas. Las cooperativas deben articular estrategias de diversificación de fuentes de fondeo y de gestión activa de la cartera para preservar su solvencia de largo plazo (Quinga, 2025)

El progreso en inclusión financiera durante los últimos años se asocia con un aumento en el acceso a créditos de vivienda y en el financiamiento dirigido a segmentos productivos. No obstante, este avance resulta insuficiente frente a la demanda potencial en zonas rurales y entre microempresarios informales. Las políticas públicas deben complementar la regulación prudencial con incentivos tributarios y con la modernización de la banca pública de segundo piso. La articulación entre el sector cooperativo y las plataformas digitales emerge como una vía promisoría para ampliar la cobertura y reducir los costos operativos. La evidencia reciente confirma que el sector mantiene una trayectoria inclusiva, aunque persisten brechas significativas (Jácome, 2026).

La dinámica de intermediación financiera a nivel provincial evidencia efectos heterogéneos sobre la actividad económica. En una economía dolarizada, la transmisión de los flujos de crédito hacia el producto interno bruto regional depende de la velocidad de respuesta del sistema cooperativo y de la composición sectorial de la cartera. Las provincias con mayor presencia de cooperativas del primer segmento capturan una proporción más amplia de los efectos expansionistas del crédito. Esta heterogeneidad plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas redistributivas y sugiere la necesidad de instrumentos diferenciados por territorio. La evidencia econométrica confirma la relación positiva entre intermediación financiera y actividad económica provincial (Casares et al., 2026).

Desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, el sector cooperativo ecuatoriano presenta oportunidades significativas y desafíos no resueltos. La adopción de criterios de sostenibilidad en la asignación del crédito permite orientar recursos hacia actividades productivas de bajo impacto ambiental y elevado valor social, pero la incorporación de estos criterios exige capacidades técnicas que muchas cooperativas medianas y pequeñas aún no han desarrollado. Las prácticas de sostenibilidad en el sector financiero latinoamericano muestran avances desiguales y requieren articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. La integración efectiva de estos criterios depende del fortalecimiento institucional y de la disponibilidad de información estandarizada (Hluszko et al., 2024).

El desarrollo financiero de las cooperativas ha incidido positivamente en el crecimiento económico nacional, aunque la magnitud del efecto varía según el segmento analizado. Las cooperativas del primer segmento muestran una contribución más directa al producto interno bruto por su capacidad de intermediación a gran escala. En contraste, las cooperativas menores contribuyen a la dinamización de economías locales y al sostenimiento del empleo informal. Esta diferenciación indica que las políticas de fomento deben reconocer la heterogeneidad funcional del sector y diseñar instrumentos proporcionados al rol específico de cada segmento. Al respecto Gualpa et al. (2024), confirman la relación entre el desarrollo cooperativo y el desempeño macroeconómico

El análisis comparativo de la captación y colocación de recursos en las cooperativas del primer segmento revela patrones diferenciados entre entidades. La capacidad de captación depende de la red de oficinas, de la reputación institucional y de la oferta de productos de ahorro atractivos. La colocación responde a la estrategia comercial, al perfil de riesgo asumido y a las condiciones regulatorias vigentes. Las entidades con mayor eficiencia operativa logran un margen de intermediación más favorable, lo que refuerza su posición competitiva. Esta dinámica expone la tendencia a la concentración y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad competitiva de las cooperativas de menor escala (Espinoza y Carvajal, 2025).

La comparación con experiencias latinoamericanas ofrece elementos relevantes para la discusión. El caso chileno evidencia que las cooperativas de ahorro y crédito contribuyen a la inclusión financiera de segmentos vulnerables, como personas de bajos ingresos, adultos mayores, mujeres y habitantes de comunidades pequeñas. La presencia de oficinas cooperativas en el cantón de residencia

incrementa el acceso al crédito de estos grupos. Esta evidencia respalda la función social del cooperativismo y sugiere que la regulación debe preservar la cercanía territorial de las entidades. Las políticas de cierre de oficinas por razones de eficiencia pueden comprometer esta contribución a la inclusión (Lemus y Rojas, 2022).

En el contexto postpandemia, la inclusión financiera en el Ecuador ha experimentado avances importantes, aunque con marcadas disparidades cantonales. Los factores microeconómicos y regionales influyen en el acceso y uso efectivo de los servicios financieros. Las cooperativas han desempeñado un papel central en este proceso, al mantener su presencia en territorios donde la banca privada restringió operaciones. No obstante, la profundización de la inclusión exige políticas diferenciadas según las características de cada cantón. La evidencia econométrica espacial propone focalizar los esfuerzos regulatorios y de fomento en las zonas con menor desarrollo financiero relativo (Peñarreta et al., 2024).

La prospectiva del sector cooperativo sugiere un horizonte de transformación profunda. Las cooperativas de crédito y los modelos de finanzas sostenibles pueden cerrar la brecha entre la rentabilidad y el impacto social. Esta convergencia exige la incorporación de innovaciones tecnológicas, la profesionalización de la gestión y la articulación con redes internacionales. El debate académico reciente enfatiza la necesidad de repensar el papel del cooperativismo financiero como agente de transición hacia modelos económicos más sostenibles. La discusión sobre el futuro del sector incluye la integración de criterios de impacto y la rendición de cuentas ampliada (Dahbi et al., 2025).

La evolución del sector durante el periodo analizado confirma una tendencia estructuralmente creciente en volumen financiero, en paralelo al proceso de consolidación institucional. La reducción del número de entidades ha fortalecido la solvencia patrimonial del sector, la cual supera el promedio de la banca privada. Esta reestructuración ha elevado la resiliencia sistémica, aunque ha concentrado riesgos en las entidades de mayor tamaño. La trayectoria descrita permite afirmar que la regulación prudencial ha cumplido su objetivo estabilizador, aunque a costa de sacrificar parte de la heterogeneidad institucional original. La evaluación integral del periodo evidencia un balance positivo en términos de solvencia, aunque con tensiones en competitividad (León et al., 2026).

Las limitaciones de este estudio se asocian con la disponibilidad de información auditada para el último año del periodo y con los cambios metodológicos intermedios de la segmentación, donde la homogenización aplicada busca mitigar estos efectos.

En correspondencia con los hallazgos encontrados sería válido que investigaciones futuras se orienten a medir el impacto de la inclusión financiera digital y de las plataformas fintech en los márgenes de competitividad de las cooperativas, así como a evaluar la efectividad de los incentivos tributarios para la adopción de líneas de crédito verde, pues la articulación entre fintech y cooperativismo abre nuevas vías para la inclusión y la competitividad.

Conclusiones

El estudio reveló que la instauración de la supervisión prudencial incrementó la resistencia sistémica de las entidades e impulsó un crecimiento sostenido de la masa social, hasta alcanzar una cobertura efectiva sobre la mayoría de la población adulta, donde la regulación logró su objetivo estabilizador, aunque a costa de profundizar la concentración del mercado en el primer segmento institucional.

Además, el sector consolidó su rol como canal de redistribución territorial e inclusión financiera. La canalización de recursos hacia cantones con elevada pobreza y ruralidad permitió frenar el flujo de ahorro periférico hacia los centros urbanos. Asimismo, las cooperativas cumplieron una función anticíclica crucial durante los periodos de recesión, al sostener la oferta crediticia hacia microempresas y hogares cuando la banca privada restringió su liquidez.

En contraste, la alineación con la competitividad y la sostenibilidad productiva enfrentó fricciones estructurales relevantes. La aplicación de requerimientos normativos estandarizados generó asimetrías operativas que restringieron la expansión de las cooperativas menores. La política rígida de techos a las tasas de interés productivas estrechó los márgenes de intermediación, desincentivó la asignación de recursos hacia la inversión productiva de largo plazo y concentró la cartera en crédito de consumo y microcrédito.

Por último, se recomendó flexibilizar y graduar los requerimientos prudenciales para las cooperativas de menor escala, revisar los techos regulatorios aplicables al crédito productivo y fortalecer la banca pública de segundo piso. También las investigaciones futuras deberán orientarse a medir el impacto de la inclusión financiera digital y de los incentivos tributarios para la adopción de líneas de crédito verde en el Ecuador.

Acerca de

Contribución de los autores: Los autores contribuyeron en la conceptualización del estudio, al desarrollo metodológico, al análisis e interpretación de los datos, a la redacción del manuscrito y a la revisión crítica de su contenido intelectual. Asimismo, aprobó la versión final para su publicación.

Financiamiento: Los autores declaran que no recibió financiamiento para esta investigación.

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Certificación ética: Por tratarse de una investigación cuantitativa de diseño longitudinal basada en el análisis de datos secundarios provenientes de fuentes oficiales, específicamente de la Superintendencia y el Banco Central del Ecuador, el estudio no involucró la participación directa de seres humanos, intervención experimental ni recopilación de datos personales o sensibles. Los datos utilizados corresponden a información institucional y agregada de carácter público. En consecuencia, no fue necesaria la obtención de consentimiento informado ni la aprobación de un comité de ética.

Referencias

- Aguiar, R. V. y De Borja, C. F. (2023). Buen vivir in ecuador: Has the constitutional principle been reflected in structural change for development? . *Brazilian Keynesian Review*, 9(1), 77-100. <https://braziliankeynesianreview.org/BKR/article/download/289/186/1960>
- Alban, S. D., León, L. A. y Ruiz, R. V. (2025). Ecuador: El rol de las cooperativas de ahorro y crédito en la Economía Popular y Solidaria. *Espíritu Emprendedor TES*, 9(4), 1-20. <https://doi.org/10.33970/eetes.v9.n4.2025.449>
- Becerra, J. A. y Giraldo, Y. E. (2025). El Gobierno Corporativo en las Cooperativas: una mirada desde las publicaciones, tendencias y relevancia. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 150(1), 1-18. <https://doi.org/10.5209/REVE.104780>
- Berlien, K., Cediell, H., Gómez, M. F. y Alvarez, R. (2022). La Economía Social y Solidaria en América Latina y el Caribe Hacia la construcción de economías transformadoras y alternativas. *Mondes en développement*(3), 401-418. <https://doi.org/10.3917/s.med.199.0405>
- Cagua, R. J. (2025). Factores que limitan la oferta de financiamiento a las pymes en Ecuador en la última década. *Ciencias administrativas*(26), 1-1. <https://doi.org/10.24215/23143738e164>
- Cancelo, M., Vázquez, E. y Díaz, M. R. (2022). Impacto de la crisis de la covid-19 en el empleo de las cooperativas y sociedades laborales en España en el año 2020: un análisis shiftshare sectorial. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*(104), 35-64. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.104.21702>

- Carrera, K., Rodríguez, O. M., Abdo, P., Castelo, Á. G., Samaniego, C. A. y Haro, D. (2024). Beyond the financial horizon: a critical review of social responsibility in Latin American credit unions. *Sustainability*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/su16187908>
- Casares, F., Maridueña, Á., González, R., Cadena, J. P. y Álvarez, P. (2026). Financial Intermediation and Provincial Economic Activity in a Dollarised Economy: Panel VAR Evidence from Ecuador. *International Journal of Financial Studies*, 14(6). <https://doi.org/10.3390/ijfs14060140>
- Castro, S. A., Chima, E. M., Orbe, M. P. y Ordoñez, C. G. (2022). La evolución histórica de la economía popular y solidaria y su aporte a la economía de Ecuador. *Revista Decisión Gerencial*, 1(2), 64-84. <https://doi.org/10.26871/rdg.v1i2.21>
- Costales, R. I., Brito, F. J., Erazo, C. R. y Avalos, V. G. (2025). Analysis of the management of segment 1 of cooperatives in the Cayambe canton and its regulations in the case of Ecuador. *Salud, Ciencia y Tecnología-Serie de Conferencias*, 4. <https://doi.org/10.56294/sctconf20251363>
- Dahbi, F., Carrasco, I., Floreani, J. y Petracci, B. (2025). Exploring the Future of Social Economy in the Financial Sector: Sustainable Finance and Credit Cooperatives. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*(114), 197-221. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.114.30289>
- Espinoza, L. E. y Carvajal, A. L. (2025). Análisis comparativo de la captación y colocación de recursos en las cooperativas del segmento 1 en Ecuador durante dos tetramestres del año 2024. *Journal of Economic and Social Science Research*, 5(1), 35-51. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n1/159>
- Gualpa, A. E., Mosquera, J. M., Urbina, M. A. y Alvarado, J. A. (2024). Desarrollo financiero de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador y su impacto en el crecimiento económico. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 26(2), 446-460. <https://doi.org/10.36390/telos262.11>
- Hluszko, C., Vetroni, M., Martinsde, A., Ramos, D. A., Castillo, M. I., Moretti, V., et al. (2024). Sustainability in practice: Analyzing environmental, social and governance practices in leading Latin American organizations' reports. *Cleaner Production Letters*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.clpl.2024.100069>
- Jácome, E. A. (2026). Análisis comparativo de la contribución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con impacto social: años 2023 y 2024. *Polo del Conocimiento*, 11(6), 2908-2926. <https://doi.org/10.23857/pc.v11i6.11907>
- Lemus, A. y Rojas, C. (2022). Contribución a la inclusión financiera de las cooperativas de ahorro y crédito en Chile. *Revista de análisis económico*, 37(1), 75-103. <https://doi.org/10.4067/S0718-88702022000100075>
- León, L. A., Fernández, J. C. y Bueno, A. S. (2026). Evolución del sector financiero popular y solidario en la inclusión financiera del Ecuador (2015–2024). *Ciencia y Educación*, 7(6), 106-115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20586372>
- Lucin, S. D. y Vásconez, L. G. (2025). Responsabilidad social como motor del desempeño financiero en cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador [Social responsibility as a driver of financial performance in savings and credit cooperatives in Ecuador]. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 5(economica), 190-205. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v5ieconomica.349>
- Méndez, B. B. y Haro, J. P. (2026). El impacto de las cooperativas de ahorro y crédito en la inclusión financiera de poblaciones rurales en el Ecuador: Un análisis desde la economía social y solidaria. *Polo del Conocimiento*, 11(1), 559-577. <https://doi.org/10.23857/pc.v11i1.11026>

- Mendoza**, K. F. y **Loor**, M. I. (2026). Análisis de la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. *Innova Science Journal*, 4(3), 393-414. <https://doi.org/10.63618/omd/isj/v4/n3/355>
- Oña**, B. E., **Belduma**, R. G., **Sanchez**, B. J. y **Navas**, S. J. (2024). Sistema Financiero Popular y Solidario: Visión Económica y Social: Popular and Solidarity-based Financial System: Economic and Social Vision. *Multidisciplinary Latin American Journal*, 2(3), 48-60. <https://doi.org/10.62131/MLAJ-V2-N3-004>
- Organisation for Economic Co-operation and Development**. (2024). *Perspectivas económicas de América Latina 2024: Movilizar recursos de los mercados financieros para el desarrollo*. OECD. https://www.oecd.org/es/publications/perspectivas-economicas-de-america-latina-2024_25aed2f5-es.html
- Padrón**, A. M., **De La Hoz**, B. A., **De La Hoz**, A. I. y **Calanchez**, Á. (2024). Tasas de interés y volúmenes de crédito de la banca privada en el financiamiento del segmento productivo PYMES ecuatoriano. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 26(1), 7-18. <https://doi.org/10.36390/telos261.02>
- Peñarreta**, M., **Flores**, J. y **Chavez**, N. (2024). Inclusión financiera en Ecuador: un enfoque post pandemia con econometría espacial. *European Public and Social Innovation Review*, 9, 1-20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1710>
- Quinga**, K. E. (2025). *Liquidez y cartera de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el Distrito Metropolitano de Quito, periodos 2019-2022* [Magíster en Contabilidad y Auditoría Universidad Estatal Península de Santa Elena]. La Libertad, Ecuador. <https://repositorio.upse.edu.ec/server/api/core/bitstreams/82f54c61-ccb5-4eb5-b2c5-016a43965d2e/content>
- Sánchez**, C. (2024). Entre legitimidad e instrumentalización política. Economía Social Solidaria y Popular en Argentina, Brasil y Colombia. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*, 7, 79-96. <https://doi.org/10.33776/riesise.v7.8272>
- Saucedo**, L. A., **Oropeza**, M. Á. y **Ruiz**, R. (2024). Educación e inclusión financiera en México y Colombia. *RAN*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.29393/ran10-1e1lr30001>
- Segovia**, M. J., **Miranda**, I. M. y **Oquendo**, F. A. (2023). Sustainable finance: The role of savings and credit cooperatives in Ecuador. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(3), 951-980. <https://doi.org/10.1111/apce.12428>
- Viteri**, L. Y., **Balladares**, G. G., **Jara**, J. J. y **Guerra**, O. L. (2025). Inclusión financiera en Ecuador, barreras, avances y efectos socioeconómicos: una revisión sistemática. *Revista Enfoques*, 9(36), 311-328. <https://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v9i36.216>